



En Chile no habrá izquierdización: una nueva lectura de los llamados “movimientos sociales”

I. Introducción

De un tiempo a esta parte se ha vuelto casi un lugar común afirmar la nueva efervescencia que han cobrado los llamados movimientos sociales en Chile y los supuestos efectos de adherencia a las ideas clásicas de las izquierdas que estarían generando en la ciudadanía. De este modo, se ha pretendido instalar una hegemonía que tendría como fin reflatar la idea de que el modelo económico-político estaría agotado y que han sido precisamente las demandas de dichos movimientos las que habrían tenido la capacidad de representar a la ciudadanía en tal crítica.

Aún cuando se pueda reconocer que la función política de los diferentes movimientos consiste en extender la conflictividad social para generar presiones que impliquen la posibilidad de aceptación de las demandas, también se debe admitir que la intención actual responde más bien a una aversión

RESUMEN EJECUTIVO

La recepción del gramscismo por parte de la izquierda chilena de los 80 llevó a dicho sector plantearse como posibilidad real aglutinar nuevas voluntades colectivas que darían cuenta de un nuevo bloque histórico, supuestamente capaz de generar un tejido político hegemónico. Tal parece que hoy en día se busca replicar, subrepticamente, el mismo esquema por parte de un sector de la izquierda que se incrusta en los llamados movimientos sociales. Las complejas relaciones entre este paradigma interpretativo y el proceso de modernización se expresan en una crisis identitaria de la actual oposición. Se observa un “progresismo radicalizado”, que no comprende la radicalidad de los cambios culturales y el carácter difuso de la protesta social en Chile.

a consumir pactos institucionales que fortalezcan los alcances de la democracia representativa. Esta condición paradójica del “movimientismo” lleva a cuestionar el estatuto de la demanda social en la actual coyuntura, por cuanto la ausencia de acuerdos institucionales permite cuestionar sus fines últimos, toda vez que se inspiran en cultivar la fractura institucional, difundir una suerte de corrosión social, perdiendo de vista el sentido de la demanda institucionalizada.

Es parte de la mitología de izquierda sostener que los movimientos sólo activan una cadena de reivindicación qua reivindicación, sin hacer una reflexión de los perjuicios institucionales que activan tales procesos. A saber: la cuestión de la socavación del orden social y la institucionalidad. Por ello, en nuestra atmósfera cultural ha tenido lugar una naturalización de la protesta social, cuya legitimación hace de ella una especie de auto-valoración solipsista. La nunca acabada construcción del orden deseado y la complejidad del tejido asociativo son precisamente los fundamentos para evitar socavamientos —muchas veces gratuitos— al campo institucional. La experiencia chilena allá por la década de los 70 consistió en padecer como sociedad drásticas rupturas político-ideológicas que han sido parcialmente superadas merced a la poco recordada “democracia de los acuerdos”. Del problema del orden y de la falta de sentido de valor de la institucionalidad deviene una cuestión central. En esta perspectiva se orientan las reflexiones siguientes.

II. Alcances y restricciones de la renovación socialista: el efecto Gramsci

Para analizar el esquema constitutivo de los movimientos actuales es necesario hacer una mirada a su génesis. El denominado proceso de “renovación socialista” en Chile alcanzó su mayor expresión política durante el quinquenio que va de 1980 a 1985. En una breve síntesis, ello consistió en una revisión político-conceptual de las premisas que informan la evolución de la izquierda chilena, proceso que se apoyó en el auge y declive del euro-comunismo italiano (PCI) y francés (PCF) hacia fines de los años 70, como crítica a la tesis del partido único, propia de los socialismos de la cortina de hierro. Esta mutación quedó afianzada cuando el año 1986 fue decretada la cancelación de la llamada “rebelión popular”, estrategia acuñada por los grupos de izquierda más radicalizados que enfrentaban al gobierno militar mediante acciones violentas. Desde 1987 en adelante, los sectores de oposición pacífica al régimen militar (campo político-intelectual de la futura Concertación) comenzaron a asimilar la necesidad de una transición consensuada que se expresó —años más tarde— bajo una gradual reapropiación del liberalismo económico graficada en una apertura a una matriz de bienes y servicios. Este proceso tuvo como resultado la incubación de la futura transición a la democracia. Ello implicó que los partidos de izquierda (especialmente la cultura socialista) debieron someterse previamente, ya sea por una convicción real o por la prolongada agonía de los “socialismos reales”, a una drástica revisión de supuestos, diagnósticos y formas de concebir la acción política, pues existían allí ideas-fuerzas que formaban parte del imaginario maximalista de la Unidad Popular y el colapso del sistema democrático.

Bajo este contexto se inicia la revisión por parte de la izquierda de una serie de supuestos referidos al rol del Estado, el privilegio de los partidos obreros y el cambio social. Este fue el escenario de recepción y emergencia más relevante del gramscismo en la izquierda chilena, y de paso proporcionó una

“flexibilidad” analítica asociada directamente a la noción de *hegemonía*. Esta categoría política fue acuñada por el teórico italiano Antonio Gramsci que escribía su obra (*Cuadernos de la Cárcel*) desde el encierro. La hegemonía supone, entre otras cosas, la constitución de “voluntades colectivas”, de carácter poli-clasista, que darían lugar a un bloque histórico (nacional-popular) compuesto por agentes heterogéneos que establecen una serie de demandas cruzadas contra el bloque de la dominación. Para dicho autor, la sociedad civil es un tejido asociativo (ideológico) irreducible a la esfera económica y estatal. De esta manera, Gramsci es el primer teórico político que se aparta del economicismo típico de un marxismo vulgar y resitúa la noción de sociedad civil¹. El discurso gramsciano estimuló en la izquierda chilena la creación de un modelo político que hereda las tradiciones reformistas de la social-democracia europea.

Este proceso de recepción le permitirá a la izquierda “criolla” en un momento de renovación, comprender la irrupción de los movimientos sociales y populares que –durante la década de los años 80– pretendían vencer al régimen militar bajo una matriz conceptual más fluida, pero que a su vez debía administrar los consensos normativos de la futura sociedad civil.

Sin perjuicio de lo anterior, la matriz Gramsciana provee además una doble “puerta de escape”. De un lado, ya no se trata del “asalto de palacio” y la decimonónica tesis del cambio social, sino de entender que las transformaciones deben penetrar a nivel del sentido común reconfigurando los resortes culturales políticos. De otro, se trata de reconocer la proliferación de demandas sociales y la constitución de un campo de reivindicaciones donde los partidos obreros dejaran de tener una centralidad omnímoda. En medio de esta encrucijada, la renovación socialista debía –por obligación o convicción– revalidar la institucionalidad democrática, pese a que hacía pocos años (década de los 70) la democracia era considerada una categoría “pecaminosa” para las izquierdas y un escollo procedimental en el épico camino de la denominada “transformación social”. Todo este fenómeno tuvo lugar como un proceso de renovación parcial a mediados de la década de los 80. Sin este viraje, forzado o no, hubiese resultado más difícil alcanzar la democracia de los acuerdos que se extendió a lo largo y ancho de los años 90.

Sin embargo, a muy poco andar, el bloque socialista de la emergente Concertación, como asimismo, la clase política en general, suscribió un pacto tácito en materias claves como el gasto público focalizado; disciplina fiscal y un régimen de políticas públicas sectoriales. De este modo, quedaba instalado un diseño para atender la reivindicación social, pero a contrapelo, pues lo anterior habla de una nueva hegemonía: el proceso de modernización implementado bajo el gobierno militar.

Debemos admitir que a través del gramscismo tienen lugar dos procesos aparentemente contradictorios. Para la oposición pacífica al régimen militar –principal receptor de sus categorías– se trata de implementar nuevas estrategias discursivas para concebir la transformación social en una izquierda de corte reformista que trasciende una comprensión tacticista del Estado (década de

1. Al respecto se puede consultar la lectura de Jean Cohen y Andrew Arato. “Gramsci y la idea de sociedad civil socialista”. En *Sociedad Civil y Teoría Política*. F.C.E. México, 2000.

los 80). La lectura que ofrece Norberto Bobbio nos señala que Gramsci constituye una especie de atmósfera cultural de las izquierdas post-keynesianas; un ethos que busca terminar incrementalmente las supuestas relaciones de dominación del régimen capitalista. El dilema entonces para la izquierda chilena fue, ¿lucha de clases o lucha hegemónica? De un lado, se admite el carácter ineradicable del mundo liberal, pero de otro, se mantiene una actitud activa por erosionar la nueva institucionalidad. Se trata de una recepción del gramscismo mediante reformas programáticas –y quizás funcionales– al nuevo modelo económico político chileno.

Pero como antes se consignó, simultáneamente hacia fines de la década de los años 80 va adquiriendo mayor musculatura el paradigma modernizador. Es así como las tesis del Estado subsidiario y el gasto social focalizado gana terreno transversalmente en la racionalidad de los agentes políticos. De este modo, la naciente Concertación terminó por suscribir a la modernización del Estado y ejecutar los cambios estructurales inaugurados bajo el gobierno militar que aplicaban dicha modernización.

III. El progresismo y el diagnóstico fallido

Sin embargo, a pesar de la magnitud de los cambios recién mencionados, en los últimos años se han incubado un conjunto de demandas sociales, culturales y políticas que se expresan en reivindicaciones identitarias sobre sexo-género, nuevos temas valóricos, la articulación de una “ciudadanía ecológica” (que objeta agresivamente el proyecto de Hidroaysén), la coyuntural pero decisiva revuelta pingüina (2006), hasta llegar al reconocimiento de las uniones de hecho celebrada el 21 de mayo en el discurso presidencial. Todas representan hitos que vienen a sellar este campo de reformas. Un hecho primordial se relaciona con las demandas universitarias (2011) cuya efervescencia pública en el país condujo a los partidos de izquierda, y especialmente a una especie de “progresismo radicalizado” (el actual PPD de Girardi y Quintana), a interpretar en los nuevos movimientos sociales una especie de re-emergencia de un programa de ciudadanía crítica (y también la reconstitución de un sujeto popular postergado por la Concertación, según palabras del propio Guido Girardi) que pese a estar constituido desde una heterogeneidad de demandas contra la institucionalidad, mantendría un común anhelo de transformación social y naturalización de una agenda de reformas. Es decir, puede verse que lo que se repone es un imaginario tendencialmente *maximalista*, que a la sazón de las transformaciones antes descritas, debería estar superado, por cuanto la tesis de la “izquierdización” supone distinciones político-culturales, y una triada estable de planificaciones (izquierda, centro y derecha) que deben ser interrogadas a la luz de las nuevas coordenadas culturales (globalización y des-ideologización de las demandas, tercerización de la economía, crisis de los meta-relatos).

A pesar de todo ello, como una especie de espíritu inquieto, algunos partidarios del “progresismo radicalizado” se han aventurado en sugerir, subrepticamente, el paso de una coalición de centro-izquierda a un nuevo bloque izquierda-centro. Todo ello considerando que la Democracia Cristiana no goza del mismo poder electoral que tuvo en la década de los 90 donde establecía el equilibrio de la actual oposición y era un mecanismo de contención para las ambiciones del polo izquierdista.

Desde una interpretación puramente atmosférica pareciera ser que los nuevos movimientos sociales serían el resultado de una sedimentación de conflictos y discursos críticos que obligarían al Gobierno a revisar, no sólo las formas de concretar las demandas en política pública focalizada, sino además el modelo económico en general, junto con el sistema político electoral, hasta llegar a la Constitución misma (en eso consiste, por ejemplo, la demanda de asamblea constituyente). El eventual renacer de los movimientos sociales, desde la óptica del inusitado “progresismo crítico”, daría cuenta de una cadena de reivindicaciones extendidas y estructurales que, según los dirigentes de la actual oposición, obedecería a un cuestionamiento más o menos frontal, que tiene como objeto increpar al orden institucional en su conjunto.

Así entonces, la sugerencia progresista, realizada bajo una previa lectura socio política de tono a veces culposos, acusa una supuesta recomposición orgánica e ideológica de los actores sociales en el espacio público que tendería a “amalgamar” las reivindicaciones bajo una misma finalidad de la estrategia política. Esta versión, no obstante, constituye un dudoso diagnóstico y una regresión ideológica en la comprensión de las nuevas reivindicaciones sociales, basada en una lectura clásica de los actores sociales y sus alianzas políticas.

IV. Análisis crítico

Frente a lo anterior, como primera cuestión se debe rebatir la lectura del mundo PPD y los sectores de la izquierda alternativa, por cuanto comparten un diagnóstico (aunque no necesariamente un mismo método) donde prima una *inflación ideológica* que reproduce los esquemas del mundo industrial de los 70 e incluso parte de los 80, en tanto se elabora una lectura tradicional de la acción colectiva que no se encuentra vigente hoy. No se pretende negar la emergencia de las nuevas demandas, ni los efectos que ella genera, por cuanto es innegable su estatuto fáctico. Se discrepa, en cambio, del marco interpretativo que está detrás de este análisis sobre el paradero asignado a los nuevos movimientos. A saber, la falsa hipótesis que supone plausibilidad de construir de un tejido social crítico que pueda unificarse bajo la acción colectiva en una orientación de demandas programáticas contra el marco institucional (el gramscismo descrito anteriormente). Por las razones que más adelante se expondrán, se considera altamente improbable que la actual fase de la demanda social en Chile de lugar a un programa político estable que venga a generar un proceso hegemónico contra el orden social. Los principales argumentos para corroborar lo anterior son:

- a) La tesis ideológica PPD e izquierda alternativa supondría admitir que las demandas sociales avanzan espontáneamente hacia una equivalencia de contenidos entre los diversos grupos sociales. Se trataría entonces de una diversidad de ideas que se acoplan mediante una mediación espontánea. Este diagnóstico prescinde y desconoce el carácter complejo y diferenciado de las sociedades contemporáneas que se caracterizan tanto por su des-ideologización política, como también por desconfiar de los grandes relatos. En ese sentido, pretender creer que los movimientos de la calle serían capaces de arrastrar cierta homogeneidad social o una amplia

recepción a los discursos decimonónicamente ideológicos, supone observar una ciudadanía capaz de garantizar la cohesión político-programática que de ellos debería desprenderse, cuestión que hoy no existe, por cuanto la sociedad se expresa en identidades políticas flotantes. Por lo mismo, ellas se comportan de un modo distinto a los pronósticos sustentados en esquemas de clases o enfoques orgánicos. Dicho de otro modo, cualquier demanda actual del ciudadano de a pie, pasa más bien por una voluntad de inclusión al modelo predominante y no por un afán emancipatorio marxista.

- b) Contra el razonamiento sugerido por el “progresismo radicalizado” que supone cierta estabilidad en los fines de los actores políticos, puede replicarse afirmando que las nuevas bases de constitución de los sujetos sociales responden a diversas fuentes de significación propias de la diseminación de las sociedades contemporáneas. Por lo tanto, dista del modelo obrero o el sindicalismo tradicional. Bajo la nueva matriz cultural, destaca la apoliticidad, la desafiación electoral y la inorganicidad del tejido social en términos de fuentes de integración. A ello se suman procesos novedosos, pero muy controversiales en sus implicancias éticas, a saber, las redes virtuales y la mass-mediación de la cultura, donde las nuevas tecnologías de la comunicación se traducen en un nuevo *sensorium de las masas* que no se relaciona con las clásicas formas de vinculación entre Estado, sociedad civil y partidos políticos. Esta mutación socio-cultural implica que el nuevo agora (polis) ya no se ubica en la geografía de la política moderna, sino que opera a través de las nuevas tecnologías de la comunicación bajo nuevos códigos de comprensión de lo humano y lo social.
- c) Finalmente, la extensión de la reivindicación en Chile se vincula a manifestaciones radicalmente heterogéneas (instrumentales, clientelares, etc.) que distan mucho de una especie de convergencia ideológica, de un horizonte común, tal cual se sugiere bajo el análisis de los sectores más radicales de la izquierda concertacionista y PC. En suma, el cambio cultural que ha experimentado la matriz social en Chile impide la tesis de un colectivismo-ideológico expresado en una insurgencia socialmente compartida que estaría detrás de los mismos propósitos. Es preciso comenzar a revisar los supuestos de este diagnóstico y consignar el estatus efectivo de la demanda social en Chile.

V. Los movimientos sociales: el nuevo estatuto de la demanda social

Ahora cabe comentar el respaldo académico de los nuevos movimientos sociales y su supuesta aplicación al “movimientismo chileno”. En el caso de la izquierda contemporánea, el sociólogo francés Alain Touraine ha representado por varias décadas uno de los referentes teóricos más importantes en el estudio de los nuevos movimientos sociales de corte industrial y post-keynesiano². Para Touraine, se

2 A propósito de la interpretación que aquí proponemos véase; A la búsqueda de sí mismo. Dialogo sobre el sujeto. Paidós, Argentina, 2002.

trata, en primer lugar, de entender el carácter particular de nuevas minorías activas y los nuevos discursos que hace tres décadas se opusieron a la inclusión universalista del Estado del Bienestar (1945-1975). Ello implica diferenciar entre demandas salariales o redistributivas vinculadas a la sociedad industrial, respecto de aquellas reivindicaciones heterogéneas (culturales y éticas) que corresponde a una fase avanzada de la modernidad positivista-instrumental. El autor Francés promueve la proliferación de sujetos portadores de demandas específicas (culturales, identitarias y sociales). Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta, cuál es el mecanismo que vincula a tales demandas, se trata de una cuestión que no está resuelta en la obra de este autor. Incluso, en uno de sus últimos trabajos el propio Touraine cita el concepto de *libertad negativa* acuñado por el filósofo liberal Isaiah Berlin, subrayando que todos los sujetos tienen el derecho universal a la individuación social, cultural, ética, y hasta estética.

En uno de sus últimos trabajos Touraine pretende levantar la idea de restitución del valor individual del sujeto por cuanto ya no estaría bajo el supuesto yugo de estructuras globales (universalismos) que antes lo “asfixiaban”, a saber, el Estado omnímodo, el gran partido, la sociedad de clases, el sindicato orgánico, los Estados populistas en América Latina, etc. Para Touraine, cada individuo tiene un derecho universal a expresar su singularidad y constituir su yo. La tesis aquí es que la condición de emergencia del sujeto pasa por la erradicación de las creencias trascendentales o los llamados meta-relatos: la razón, la técnica, la religión, etc.

El concepto de *libertad negativa*³ hace insustentable la construcción hegemónica o proyectual del movimientismo (como se entiende en la coyuntura chilena) ya que la estructura argumental consiste en aprobar la proliferación de diferencias. Y si a ello se agrega la prescindencia de los patrones institucionales, resulta un angosto margen para establecer pactos hegemónicos. Por lo tanto, para quienes han pretendido ubicar a Touraine como uno de los referentes inequívocos del cambio social en el Chile actual –como es el caso de Manuel A. Garretón o Gabriel Salazar, por ejemplo, aunque en general es parte de la tradición de la sociología latinoamericana⁴– previamente deberían explicar las distinciones antes consignadas. Especialmente, la consistencia de la relación entre el estatuto secular de los derechos del liberalismo cultural y la reivindicación instrumental y crediticia, en el caso chileno. Una cuestión similar cabría hacer con el neo-gramscismo en términos de poder obtener una explicación satisfactoria respecto al carácter en última instancia unitario de las demandas sociales bajo un mismo discurso hegemónico capaz de contener el campo de las diferencias socio-culturales.

En el caso chileno, los movimientos sociales poseen una larga tradición y han sido concienzudamente estudiados por la historiografía crítica⁵. Sin embargo, en la actualidad lo poco definido de su gen les otorga un estatuto casi enigmático. Empíricamente se trata de expresiones de rechazo frontal al orden

3. Del célebre autor liberal se debe consultar; “Dos conceptos de libertad”. Editorial, Alianza, 1958.

4. Al respecto, véase: http://www.facso.uchile.cl/noticias/2009/touraine_soc.html; <http://www.manuelantonioigarretton.cl/presentacion5.html>; <http://www.flacso.cl/home/index.php/foros/929-alain-touraine-el-hombre-es-un-animal-que-tiene-el-derecho-a-tener-derechos>; http://www.archivochile.com/Mov_sociales/Doc_gen/MSdocgen0010.pdf

5. Nos referimos a Gabriel Salazar. Véase; Violencia política popular en las Grandes Alamedas. Volumen I. Sur, Santiago, 1990.

normativo y allí la calle pasa a invertir el primer concepto asociado por inercia al “modelo”, “estructura” o “sistema” que se busca reformar, cuestión que se traduce en una lamentable “caotización urbana” con dosis delincuenciales y reactivas contra la institucionalidad. De otro lado, aparece el movimiento estudiantil y la apelación a una educación pública de calidad que termine con el lucro. Pero existen dudas en cuanto a que en el apoyo a estas demandas no predomina un deseo de cambiar las bases estructurales del modelo, o bien, un cuestionamiento que busca mejorar la gestión, la rentabilidad y los indicadores de logro del sistema educacional, más allá del consabido problema del lucro. Más bien parece que el esfuerzo cupular de los movimientos (tomados por el PC y la izquierda autónoma) tiene como intención levantar la imagen de que en Chile el modelo y las instituciones deberían ser reformadas por cuanto estaría generando un descontento general. En definitiva, habría un trabajo comunicacional de quienes históricamente se han manifestado en oposición a la modernización del Estado y el nuevo rol que asume desde el régimen militar. Lo que interesa dejar establecido es el carácter aleatorio de los discursos involucrados y la compleja consistencia sociológica de sus acciones. Finalmente, en el ámbito de la matriz cultural, existe un “collage de consumidores” activos que establecen todo tipo de reclamos contra las grandes multi-tiendas, no obstante, se trata de segmentos medios donde el consumo es un mecanismo de integración simbólica, y no al revés.

Sin embargo, la hipótesis que acá se plantea es que el nuevo ciclo de reivindicaciones en materia social, cultural y política, no guarda relación directa con actores ideológicos tradicionales, sino más bien con el *empoderamiento* de un ciudadano *consumidor* —e informado— que establece diversas quejas y reivindicaciones de mejoramiento frente a una sociedad de bienes y servicios. Vale decir que, el motivo de dichos reclamos no tendría como intención generar un modelo distinto a éste, sino más bien demandar más acceso a los beneficios de los diferentes procesos de modernización, y por ende, una consolidación de las promesas de inclusión que aquel ofrece.

En términos generales, en la sociedad chilena puede verse la extensión de una fase reactivo-instrumental de la demanda social, y sus efectos empíricos -qué duda cabe- responden a una aparente transversalidad social. Sin embargo, aquí tiene lugar una nueva matriz cultural referida a unos agentes cuyos modos de socialización obran tras un reclamo de “gestionalidad” y “eficacia” frente al abanico de los diferentes bienes y servicios. Este ciudadano consumidor -informado- se encontraría socializado en una especie de *empowerment mercantil* que exige más beneficios y menos ideología. En este sentido, parece ser que se está frente a una verdadera rebelión de los *consumidores* sobre los procesos de gestión y eficiencia del mercado y sus capitales simbólicos⁶.

Como es de público conocimiento, existe una crisis del imaginario público-nacional en términos de un agotamiento de las categorías modernas de constitución de sujetos, demandas y proyectos, (nos referimos a la forma en que se observa al Estado, la ausencia de participación y proyecto de

6. Hace algunas semanas el sociólogo Eugenio Guzmán, inscribió este campo de problemas (a propósito de los malestares) en un déficit de modernización que puede ser superado optimizando la gestión política-cultural. Nosotros suscribimos parcialmente a esa lectura. Del autor véase; *El malestar de Chile, ¿teoría o diagnóstico?* Ediciones RIL, Santiago, 2012.

ciudadanía, el escepticismo sobre las clásicas formas de acción política). Cuestión que explicaría las sospechas y distancias de las personas respecto de las instituciones y las coaliciones políticas. Ello torna aún más problemático el proyecto del movimiento social en Chile y, en cambio, sugiere un estado de inorganidad propia de la demanda social difusa. A partir de lo último parece observarse un vaciamiento de sentidos programáticos que se expresa en el advenimiento de un momento de pos-política, a saber, un momento de desafiliación colectiva que —en cuanto crisis de organicidad— trasciende con creces la lejanía de los sujetos con el mundo político y por ende, con cualquier sistema electoral.

VI. Conclusión: problemas y perspectivas

La consecuencia más inmediata de estas reflexiones es la imposibilidad de proliferación que tiene el “progresismo radicalizado”, por las siguientes dos razones:

- a) Por el dudoso diagnóstico progresista, por cuanto el carácter difuso de la protesta social impide una caracterización clásica. Los nuevos sucesos no pueden ser explicados bajo los supuestos ideológicos de la matriz populista que concibe secuencialmente los procesos de transformación. En este sentido, dicha tentación populista a veces recorre como un fantasma los discursos de la izquierda progresista y ahí estriba su miopía para canalizar la heterogeneidad de la demanda social. Cabe subrayar que en esta dirección las mediciones del PNUD del año 2002 si bien ya anunciaban el problema del *malestar* también exponían la figura de un consumidor existencial hace al menos un decenio.
- b) La tesis que se sostiene en este trabajo es que buena parte de las reivindicaciones operan desde y contra el paradigma gestional de un modelo que ha extendido los bienes y servicios —y que sin perjuicio de las reservas antropológicas que se podrían levantar hacia la extensión de la visión positivista de lo público— ha encontrado una fuerte validación en las nuevas pautas de sociabilidad (“estilos de vida”). Es decir, al tomarse la razón instrumental los espacios políticos bajo un ethos de la gestión, la res- pública se ha distanciado considerablemente de los imaginarios de la izquierda de viejo cuño. En esta perspectiva, no cabe suscribir a un pronóstico sobre una inminente izquierdización, pues ello supone reivindicar un modelo cultural adscrito a las fronteras de los Estados-nacionales, una forma de clásica de concebir la acción política y una vía de cambios programáticos que no guarda relación con la actual hibridez de la demandas ciudadanas ni de la acción política aquí descrita, pues su soporte histórico descansaba en el imaginario desarrollista-industrial. No obstante, en virtud de los puntos expuestos en este trabajo, resulta atingente dejar planteada la pregunta sobre cuáles son los desafíos que le caben a los agentes políticos ante la proliferación de esta ciudadanía diseminada en el consumo y des-ideologizada, más bien vinculada a la cultura de la imagen y a la crisis de sociabilidad política proyectual.

A modo de dato de útil constatación, debe considerarse que por estos días el movimiento estudiantil está volviendo a retomar sus pancartas de acción, lo cual genera un nuevo escenario de insurgencia social que probablemente pretenderá una vez más evitar el diálogo institucional, y de paso seguir pretendiendo socavar la legitimidad institucional. En ese sentido, ha quedado comprobado que la caotización urbana supera ampliamente las posibilidades de controlar desmanes por parte del progresismo radicalizado. Ello lleva a sospechar que el mecanismo de la presión urbana se encuentra un poco agotado, pues la ciudadanía también ha padecido los costos de la violencia simbólica y material de este movimiento.